



MANIFIESTO UNITARIO Patronal, sindicatos y entidades exigen inversiones de entre 600 y 900 millones sólo para recuperar la falta de inversiones tras la crisis y los recortes

El tercer sector aprieta al Govern y exige presupuestos para 2020 con más gasto social

Joan Planes - Barcelona

El sector social dice basta ante la infrafinanciación cónica, los recortes no revertidos y la falta de presupuestos por parte de la Generalitat. Hasta doce patronales, sindicatos, entidades y colegios profesionales han unido fuerzas para exigir al Ejecutivo y al Parlament que garanticen unas cuentas con mayor gasto e inversión social. Una doble reivindicación teniendo en cuenta que la aprobación presupuestaria –la ley más importante a tramitar– es la gran asignatura pendiente del Ejecutivo de Torra, que aún maneja las cifras de 2017.

En concreto, estas organizaciones reclaman «unas políticas públicas [como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Pacto Nacional para la Interculturalidad] que aseguren la cobertura de los derechos sociales, la calidad de atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales».

La congelación de los salarios, el aumento de la demanda de

atención a personas mayores, la llegada creciente de menores no acompañados, y el precio de los comedores de 6,20 euros al día por niño –que no ha sido revisado desde 2007, según el presidente de la Confederación del Tercer Sector Social de Cataluña, Joan Segarra– son algunos de los ejemplos de la situación «crítica» en la que se encuentra el sector.

«Se tendrían que inyectar entre 600 y 900 millones de euros en los servicios de atención a las personas con discapacidad, a la infancia y a personas mayores para poder empezar a recuperarnos de estos diez años de congelación salarial», añadió Segarra.

Otra de las demandas del manifiesto es apostar por un aumento de la inversión en el sector del 0,5% del PIB al 2%, como en muchos países europeos, con el objetivo de conseguirlo en siete años, según la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual.

La mesa concluye que una correcta inversión en el sistema de servicios a las personas revertirá



Al Govern se le acumulan las protestas: este fin de semana, sindicatos y entidades clamaron contra la llamada «ley Aragonès»

en la mejora de las condiciones laborales, «posibilitando alcanzar en las mesas de negociación colectiva el objetivo compartido de no tener ningún salario por debajo de los 14.000 euros» anuales.

Firman el manifiesto presentado ayer la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec), Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Asociación Estatal de Entidades de Servi-

cios de Atención a Domicilio (Asade), CCOO, UGT, La Confederació del Tercer Sector Social, la Taula del Tercer Sector Social, La Unió - Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, y la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir). También lo subscriben el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya (Ceesc), el de Trabajo Social de Catalunya (Tscat) y el de Pedagogos de Catalunya (Copec).